No. 49359*

Argentina
and
Peru

Administrative Agreement concerning the application of the Agreement on social security between the Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Peru. Lima, 22 March 2010

Entry into force: *6 July 2011 by notification, in accordance with article 26*

Authentic text: *Spanish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Argentina, 22 February 2012*

*No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.

Argentine
et
Pérou

Accord administratif concernant l'application de l'Accord relatif à la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République du Pérou. Lima, 22 mars 2010

Entrée en vigueur : *6 juillet 2011 par notification, conformément à l'article 26*

Texte authentique : *espagnol*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Argentine, 22 février 2012*

* *Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les textes reproduits ci-dessous, s'ils sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour l'enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL]

ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República del Perú, en adelante denominados "las Partes", de conformidad con el artículo 6° del Convenio de Seguridad Social celebrado en Buenos Aires el 17 de junio de 1979 entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República del Perú, denominado de aquí en adelante "el Convenio", han decidido suscribir el presente Acuerdo Administrativo:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°
Definiciones

1. Los términos utilizados en este Acuerdo Administrativo, tendrán el mismo significado que en el Convenio, con las particularidades señaladas a continuación:

   (a) "Trabajador" designa a toda persona que, como consecuencia de realizar o haber realizado una actividad por cuenta ajena o propia, está o ha estado sujeta, a las legislaciones mencionadas en el artículo 2° del Convenio.

   (b) "Pensionista" designa, respecto del Perú, a las personas receptoras de prestaciones económicas o pensiones, por derecho propio o derivado.

   (c) "Beneficiario" designa, respecto de la Argentina, a toda persona que reciba una prestación prevista por la legislación propia a que se refiere el artículo 2° del Convenio.

(d) "Derechohabiente o Causahabiente" designa a toda persona que en virtud de la normativa propia tenga derecho a percibir una pensión por fallecimiento.

(e) "Período de Servicio Computable" designa cualquier período de cotización que haya sido reconocido y completado bajo la normativa de una Parte, así como cualquier otro período considerado como equivalente a un período de servicio computable previsto por la normativa de cada una de las Partes.

(f) "Prestación" designa cualquier prestación monetaria, pensión, renta, o asignación, prevista por las normas mencionadas en el artículo 2° del Convenio incluido todo complemento, suplemento o revalorización.

(g) "Sistema Privado de Pensiones" designa, respecto del Perú, al Sistema de Seguridad Social de cotizaciones definidas basado en principios de capitalización individual, propiedad privada, administración privada, supervisión estatal y cuyos beneficios están vinculados a las aportaciones realizadas por el afiliado. Los beneficios son los de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos o asignaciones de sepelio.

(h) "Bono de Reconocimiento" designa, respecto del Perú, a los títulos valores expresados en dinero y sujetos a una condición de redención que conforme a la normativa peruana, represente los períodos de cotización efectuados en el Sistema de Reparto peruano, con anterioridad a la incorporación al Sistema de Capitalización Individual.

(i) "Pensión con garantía estatal" designa, respecto del Perú, a la prestación que otorga el Estado en el caso de los afiliados que con anterioridad a la incorporación al Sistema de Capitalización Individual, aportaron al Sistema de Reparto peruano, conforme a la normativa peruana vigente.

(j) "Régimen Especial" designa, respecto de la Argentina, aquellos regímenes de jubilaciones y pensiones que modifican el cálculo y la movilidad de las prestaciones.

(k) "Régimen Diferencial" designa, respecto de la Argentina, todo régimen de jubilaciones y pensiones que reduce requisitos en razón de tareas determinantes de vejez prematura.

(l) "Trabajador asalariado" designa al trabajador que presta su fuerza laboral, mediante un contrato de trabajo y en relación de dependencia.

(m) "Trabajador por cuenta propia" designa, respecto del Perú, al trabajador que se desempeña laboralmente de manera independiente.

(n) "Trabajador Autónomo" designa, respecto a la Argentina, al trabajador que por sí sólo o alternativamente con otro, asociado o no, ejerza habitualmente una actividad lucrativa que no configure una relación de dependencia.

2. Cualquier término no definido en este artículo tendrá el significado que le asignen las normas aplicables.

Artículo 2°
Autoridades Competentes

Conforme con lo establecido en el artículo 5°, inciso a) del Convenio, las Autoridades Competentes son:

a) Respecto de la Argentina: El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
b) Respecto del Perú: El Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Artículo 3°
Entidades Gestoras

Las Entidades Gestoras a que hace referencia el artículo 5°, inciso b) del Convenio serán:

Para la Argentina:

- La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
- Las Cajas o institutos de previsión de seguridad social provinciales o municipales, cuyos regímenes no fueron transferidos al Estado Nacional, y de profesionales en lo concerniente a los regímenes de jubilaciones y pensiones que cubren las contingencias de invalidez, vejez y muerte, basados en el Sistema de Reparto o en la Capitalización.
- Comisiones Médicas.

Para el Perú:

- Las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP).
- La Oficina de Normalización Previsional (ONP) en lo que respecta al Sistema de Reparto peruano.
- Las empresas de seguros, en lo que a riesgos previsionales se refiere.
- El Comité Médico de las Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (COMAFP) y el Comité Médico de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (COMEC), para afiliados del Sistema Privado de Pensiones.
- Las Comisiones Médicas que la ONP designe.

Artículo 4°
Organismos de Enlace

1. Los Organismos de Enlace a que hace referencia el artículo 5°, inciso c) del Convenio serán:

   Para la Argentina:

   - La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en lo atinente a las prestaciones previstas por los regímenes de jubilaciones y pensiones nacionales, provinciales, municipales y de profesionales, basados en el Sistema de Reparto o en la Capitalización.

   Para el Perú:

   - La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones.
   - La Oficina de Normalización Previsional (ONP), para los asegurados al Sistema Nacional de Pensiones.

2. Los Organismos de Enlace designados en el numeral precedente establecerán de común acuerdo los procedimientos complementarios y los formularios necesarios para la aplicación del Convenio y del presente Acuerdo Administrativo.

Artículo 5°
Ámbito de aplicación material

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2° del Convenio, el presente Acuerdo Administrativo se aplicará a los regímenes contributivos de Seguridad Social vigentes en el territorio de las Partes.

2. En virtud de lo establecido en el numeral 3 del artículo 2° del Convenio, el presente Acuerdo Administrativo se aplicará también a las normas relativas al Sistema Privado de Pensiones, en lo referente a todos los beneficios que otorga y, en particular, a las prestaciones económicas de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.

3. Las normas de los Convenios bilaterales o multilaterales celebrados con terceros Estados por las Partes, no afectarán la aplicación de las normas del presente Acuerdo Administrativo.

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES

Artículo 6°
Igualdad de trato

A menos que el presente Acuerdo Administrativo establezca otra cosa, las personas referidas en el artículo 1° del Convenio tienen las obligaciones y le corresponden los derechos previstos en la legislación de cada Parte, en las mismas condiciones que los nacionales de esa Parte.

Artículo 7°
Exportación de prestaciones

1. Como consecuencia de lo establecido en el artículo 22° del Convenio, las prestaciones adquiridas de acuerdo con la normativa de una Parte y pagadas en la otra Parte, no estarán sujetas a alguna reducción, modificación, suspensión, supresión o retención por razones vinculadas al hecho de que el receptor resida o se encuentre en el territorio de la otra Parte, con la sola excepción de los gastos de transferencia que demande hacer efectivo el pago de la prestación económica en el territorio de esa Parte.

2. Las prestaciones reconocidas en base al Convenio a trabajadores, pensionistas o beneficiarios que residan en el territorio de un tercer Estado, se harán efectivas en las mismas condiciones y con igual extensión que las previstas para los propios nacionales que residan en ese tercer Estado.

Artículo 8°
Totalización de períodos de seguro

1. Cuando un trabajador haya cumplido períodos de servicios computables sucesiva o alternativamente en el territorio de ambas Partes, las Entidades Gestoras tendrán en consideración, si fuera necesario, los períodos de servicios computables de conformidad con las normas de la otra Parte a efectos de la adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones de acuerdo con su propia normativa, siempre que dichos períodos no se superpongan con los suyos y con las particularidades establecidas en los artículos 21° y 22° del presente Acuerdo Administrativo.

2. Cuando no se pueda determinar de modo preciso en qué época se han cubierto ciertos períodos de servicios computables, de cotización o de empleo bajo la normativa de una de las Partes, se presumirá que dichos períodos no se superponen a los períodos de servicios computables, de cotización o de empleo cubiertos bajo las normas de la otra Parte y se

tendrán en cuenta en la medida en que su cómputo posibilite el acceso a la correspondiente prestación o la mejora de la misma.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES SOBRE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

Artículo 9°
Excepciones

De acuerdo a lo previsto en los artículos 3° y 4° del Convenio, se establecen las siguientes excepciones al principio de aplicación territorial de la normativa de cada una de las Partes:

1. El trabajador asalariado al servicio de una empresa cuya sede se encuentre en el territorio de una de las Partes y sea enviado por dicha empresa al territorio de la otra Parte para realizar trabajos de carácter temporal, quedará sometido a la normativa de la primera Parte, siempre que la duración previsible del trabajo para el que ha sido desplazado no exceda los doce (12) meses, ni haya sido enviado en sustitución de otro trabajador cuyo período de desplazamiento haya concluido.

2. Si, por circunstancias imprevisibles, la duración del trabajo a que se refiere el apartado anterior excediera los doce (12) meses, el trabajador continuará sometido a la normativa de la primera Parte por un nuevo período, de acuerdo a lo previsto en el artículo siguiente.

3. El trabajador por cuenta propia o autónomo que ejerza normalmente su actividad en el territorio de una Parte en la que esté asegurado y que pase a realizar un trabajo de la misma naturaleza en el territorio de la otra Parte, continuará sometido a la normativa de la primera Parte, a condición de que la duración previsible del trabajo no exceda los doce (12) meses.

4. Si, por circunstancias imprevisibles, la duración del trabajo a que se refiere el apartado anterior excediera de los doce (12) meses, el trabajador continuará sometido a la normativa de la primera Parte por un nuevo período, de acuerdo a lo previsto en el artículo siguiente.

5. Una persona que trabaje como miembro de la tripulación de una aeronave estará, respecto a este trabajo, sujeto a las normas de la Parte en cuyo territorio la empresa para la que trabaja, tenga su oficina principal.

   Sin embargo, si la empresa tuviera una sucursal o una representación permanente en el territorio de la otra Parte, la persona que trabaje para esta sucursal o representación estará sujeta a la normativa de la Parte en cuyo territorio ésta esté domiciliada.

6. El trabajador asalariado que ejerza su actividad a bordo de un buque estará sometido a la normativa de la Parte cuya bandera enarbole el buque.

   No obstante lo anterior, cuando el trabajador sea remunerado por esa actividad por una empresa o una persona que tenga su domicilio en el territorio de la otra Parte, deberá quedar sometido a la normativa de esta última Parte, si reside en su territorio; la empresa o persona que pague la retribución será considerada como empleador para la aplicación de dicha normativa.

7. Los trabajadores empleados en trabajos de carga, descarga, reparación de buques y servicios de vigilancia en el puerto, estarán sometidos a las normas de la Parte a cuyo territorio pertenezca el puerto.

8. Los miembros de las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas Consulares se regirán por lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961 y en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963, sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes apartados del presente artículo.

9. El personal administrativo y técnico y los miembros del personal de servicio de las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas Consulares de cada una de las Partes, así como el personal al servicio privado de los miembros de aquellas, podrán optar entre la aplicación de la normativa de cualquiera de las Partes siempre que sean nacionales del Estado de envío o hayan estado sujetos a sus normas.

   La opción se ejercerá dentro de los tres (3) primeros meses a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo Administrativo o, según sea el caso, dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de iniciación del trabajo en el territorio del Estado receptor.

   De no ejercerse dicha opción durante el período establecido, se aplicará a las personas comprendidas en este apartado la normativa del Estado que las envía.

10. Cuando la Misión Diplomática o la Oficina Consular de una de las Partes ocupen personas que, conforme al numeral 9, estén sometidas a la normativa de la otra Parte, la misión u oficina consular debe cumplir las obligaciones impuestas a los empleadores por las normas de esta última Parte.

11. Los funcionarios públicos y el personal asimilado de una de las Partes que en el ejercicio de sus funciones sean enviados al territorio de la otra Parte, quedarán sujetos a la normativa de la Parte a la cual pertenezca la administración de la que ellos dependan.

12. Los funcionarios de los Organismos Internacionales serán regidos en lo referente a la Seguridad Social por las normativas, tratados y convenciones internacionales que les sean aplicables.

Artículo 10°
Traslados temporarios

1. Cuando la normativa de una Parte resulte aplicable en concordancia con la disposición del artículo 3° numeral 1 inciso a) del Convenio, el Organismo de Enlace, en el caso de la Argentina, y la Autoridad Competente, en el caso del Perú, a pedido del empleador y con al menos treinta (30) días de antelación a la fecha en que deba efectuarse el traslado, deberá extender un certificado dejando constancia que el trabajador asalariado está amparado por la citada normativa, indicando además el plazo de validez del mencionado certificado. Este certificado resultará hábil a los efectos de comprobar que el trabajador asalariado se encuentra exceptuado de la cobertura mencionada.

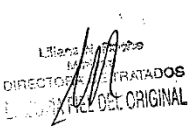
2. Cuando la legislación de una Parte resulte aplicable en concordancia con las disposiciones del artículo 9° numeral 3 del presente Acuerdo Administrativo, el Organismo de Enlace, en el caso de la Argentina, y la Autoridad Competente, en el caso del Perú, a pedido del trabajador por cuenta propia o autónomo y, con al menos treinta (30) días de antelación a la fecha en que deba efectuarse el traslado, deberá extender un certificado dejando constancia que el mismo se encuentra amparado por la citada normativa, indicando además el plazo de validez del mencionado certificado. Este certificado resultará hábil a los efectos de comprobar que el trabajador por cuenta propia o autónomo se encuentra exceptuado de la cobertura mencionada.

3. El certificado mencionado en los numerales 1 y 2, será extendido:

    a) en la Argentina, por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES);
    b) en el Perú, por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

4. El Organismo de Enlace o Autoridad Competente de la Parte que extendió el certificado al que se refieren los numerales 1 y 2, enviará una copia del mismo al Organismo de Enlace o Autoridad Competente, según corresponda, de la otra Parte para su conocimiento. Asimismo, deberá entregar copia de dicho certificado al trabajador trasladado.

5. En el caso de prorrogarse el traslado, el empleador, el trabajador por cuenta propia o el trabajador autónomo, según corresponda, enviará, para dicho efecto, al menos treinta (30) días antes del vencimiento del período de doce (12) meses, un pedido a la Institución que emitió el certificado, a que se


DIRECTORA DE TRATADOS
COPIA FIEL DEL ORIGINAL

refieren los numerales 1 y 2 del presente artículo. Esta Institución solicitará el consentimiento del Organismo de Enlace o Autoridad Competente, según corresponda, de la Parte hacia cuyo territorio se compruebe el traslado, por intermedio del Organismo de Enlace o Autoridad Competente de esa Parte y, una vez obtenido el mismo, emitirá un nuevo certificado indicando el período de prórroga.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS PRESTACIONES

Artículo 11°
Totalización de períodos

Cuando una persona haya estado sujeta a la normativa de ambas Partes, y sin perjuicio de las particularidades establecidas en los artículos 21° y 22° del presente Acuerdo Administrativo, las prestaciones se concederán según las siguientes disposiciones:

1. La Entidad Gestora de cada Parte determinará el derecho y calculará la prestación teniendo en cuenta únicamente los períodos de servicios computables de conformidad con la normativa de la misma.

2. Cuando lo señalado en el numeral anterior no ocurra, la Entidad Gestora de cada Parte determinará el derecho a la prestación totalizando los períodos de servicios computables de acuerdo con la normativa de ambas Partes. Cuando efectuada la totalización se alcance el derecho a la prestación, para el cálculo de la cuantía a pagar se aplicarán las siguientes reglas:

   a) Se calculará el importe teórico de la prestación como si todos los períodos de servicios computables hubieran sido cumplidos de acuerdo con su normativa (Prestación teórica).

   b) Sobre este importe teórico calculado de acuerdo con el inciso a) se determinará el importe de la prestación correspondiente aplicando la proporción existente entre la duración de los períodos de servicios computables bajo su normativa y el total de los períodos de servicios computables (Prestación prorrata témpore).

3. Determinado el derecho conforme se establece en los numerales 1 y 2 del presente artículo, la Entidad Gestora de cada Parte reconocerá y abonará la prestación que sea más favorable al interesado, a menos que éste solicite expresamente aplazar la liquidación de la prestación con relación a una u otra de las normativas aplicables.

4. Si las normas de alguna de las Partes exigen una duración máxima de períodos de servicios computable para el reconocimiento de una

prestación completa, la Entidad Gestora de esa Parte tomará en cuenta, para el cálculo de la prestación, solamente los períodos de servicios computables de la otra Parte que sean necesarios para alcanzar dicha prestación completa. Lo dispuesto anteriormente no será válido para las prestaciones cuya cuantía no esté en función de los períodos de servicio computables y con las particularidades establecidas en los artículos 21° y 22°.

Artículo 12°
Períodos de servicios computables inferiores a un año

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 11° del presente Acuerdo Administrativo, cuando la duración total de los períodos de servicios computables bajo la normativa de una Parte no llegue a un año y, con arreglo a estas normas no se adquiera derecho a prestaciones, la Entidad Gestora de dicha Parte, no reconocerá prestación alguna por el referido período.

   Los períodos citados se tendrán en cuenta, si fuera necesario, por la Entidad Gestora de la otra Parte para el reconocimiento del derecho y determinación de la cuantía de la prestación según su propia normativa, pero ésta no aplicará lo establecido en el artículo 11°.

2. A pesar de lo establecido en el numeral precedente, los períodos inferiores a un año acreditados bajo la normativa de ambas Partes podrán ser totalizados por aquella Parte en la que el interesado reúna los requisitos para acceder a la prestación. De tener derecho a la misma en ambas Partes, ésta sólo se reconocerá por aquella en la que el trabajador acredite las últimas cotizaciones. En estos supuestos no será de aplicación para la liquidación de la prestación lo dispuesto en el artículo 11° del presente Acuerdo Administrativo.

3. Lo dispuesto en los numerales 1 y 2 precedentes no será de aplicación para las prestaciones cuya cuantía no se encuentre en función de una cantidad de períodos de servicios computables, y con las particularidades establecidas en los artículos 21° y 22° del presente Acuerdo Administrativo.

Artículo 13°
Condiciones Generales para el
reconocimiento del derecho a las prestaciones

1. Si las normas de una Parte subordinan el otorgamiento de las prestaciones reguladas en este Capítulo a la condición que el trabajador haya estado sujeto a las mismas en el momento de producirse el hecho causante de la prestación, esta condición se considerará cumplida si en dicho momento el trabajador está asegurado en virtud de la normativa de la otra Parte o. en su

defecto, cuando reciba una prestación de ésta, basada en sus propios períodos de servicios computables.

Para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivencia o de fallecimiento, si es necesario, se tendrá en consideración si el causante se encontraba activo o era pensionista o beneficiario, de acuerdo con la normativa de la otra Parte.

2. Si las normas de una Parte exigen, para reconocer la prestación, que se hayan cumplido períodos de servicios computables en un tiempo determinado inmediatamente anterior al hecho causante de la prestación, esta condición se considerará cumplida si éstos son acreditados en el período inmediatamente anterior al reconocimiento de la prestaciones en la otra Parte.

3. Las cláusulas de reducción, suspensión o supresión previstas por la normativa de una de las Partes en el caso de pensionistas o beneficiarios que ejerzan una actividad laboral, les serán aplicables aunque ejerzan ésta en el territorio de la otra Parte.

Artículo 14°
Períodos de seguros para aplicar a Regímenes de actividades determinadas

Cuando la normativa de una de las Partes subórdine el otorgamiento de ciertas prestaciones a la condición de que los períodos de servicios computables hayan sido cumplidos en una actividad o profesión determinada, sólo serán computados para la determinación del derecho a dichas prestaciones, los períodos de servicios computables reconocidos en la misma actividad o profesión en la otra Parte. Si la suma de los períodos de servicios computables no permitiese acceder a las prestaciones, estos períodos serán tomados en cuenta dentro del régimen general, o de otro régimen especial en el que el interesado pudiera acreditar derecho.

Artículo 15°
Tramitación General de las solicitudes de prestaciones

1. La Entidad Gestora de la Parte que intervenga en primer lugar en la tramitación de las prestaciones de acuerdo a lo previsto en el Capítulo 3 del Título II del Convenio, podrá solicitar al Organismo de Enlace de la otra Parte, cualquier documentación u otra información necesaria para completar la solicitud.

2. La Entidad Gestora de la Parte que reciba una solicitud de prestación interpuesta en una Entidad Gestora de la otra Parte, podrá solicitar al Organismo de Enlace de aquella Parte cualquier documentación u otra información necesaria para completar dicha solicitud.

3. La Entidad Gestora de la Parte que intervenga en primer lugar en la tramitación de las prestaciones, podrá verificar la información pertinente como así también la del grupo familiar del peticionante. El carácter de la información a verificar, será determinado en conjunto por los Organismos de Enlace de ambas Partes. Dicha verificación tendrá por objeto sustituir la remisión recíproca de la documentación que sirvió de respaldo para ella.

Artículo 16°
Determinación de la invalidez

1. Para la determinación de la reducción del porcentaje de la capacidad laboral a los fines del otorgamiento de las prestaciones por invalidez, la Entidad Gestora de cada una de las Partes efectuará su evaluación conforme a la normativa aplicable.

2. A los fines de la aplicación de las disposiciones del numeral precedente, la Entidad Gestora de la Parte en cuyo territorio resida el trabajador pondrá a disposición de la Entidad Gestora de la otra Parte, a su solicitud y en forma gratuita, los informes y documentos médicos que tenga en su poder.

3. A pedido de la Entidad Gestora de la Parte cuya normativa se aplique, la Entidad Gestora de la Parte en cuyo territorio resida el solicitante efectuará los exámenes médicos necesarios para la evaluación de la situación del solicitante. Los exámenes médicos que correspondan únicamente al interés de la primera Entidad arriba mencionada serán asumidos íntegramente por ésta.

4. Los costos de los exámenes médicos complementarios a que se refiere el numeral precedente serán reembolsados sin demora, luego de la recepción del detalle de los gastos incurridos. Los reembolsos serán efectuados por intermedio de los Organismos de Enlace o Entidades Gestoras, según corresponda, en cada Parte.

Artículo 17°
Normas específicas relativas a las prestaciones

1. Las prestaciones reconocidas por aplicación de las normas del Convenio, se actualizarán o revalorizarán con la misma periodicidad y en idéntica cuantía que las prestaciones reconocidas al amparo de la normativa interna.

2. A menos que el presente Acuerdo Administrativo establezca otra cosa, las prestaciones que sean reconocidas mediante la totalización de períodos de servicios computables, a que se refiere el Convenio, tendrán derecho a las garantías de prestaciones mínimas de cada Parte, determinándose el monto

de las mismas según la normativa de cada Parte y de manera proporcional al tiempo efectivamente aportado en cada una de ellas.

Artículo 18°
Asignaciones por sepelio

1. Las asignaciones por sepelio se regirán por la normativa de la Parte que fuera aplicable al trabajador a la fecha de su fallecimiento.

2. En los casos de pensionistas o beneficiarios que tuvieran derecho a prestaciones por aplicación de las normas de ambas Partes, el reconocimiento de aquéllas se regulará por la normativa de la Parte en cuyo territorio residía el trabajador, el beneficiario o pensionista.

3. Si la residencia del beneficiario o pensionista fuera en un tercer país, la normativa aplicable, en el caso de que tuviera derecho a prestaciones en ambas Partes, será la de la Parte donde estuvo asegurado por última vez.

Artículo 19°
Moneda y Garantía del pago de las prestaciones

En caso que una Parte establezca controles de divisas u otras medidas similares que restrinjan los pagos, envíos o transferencias de fondos u otros instrumentos financieros a las personas que se encuentren fuera de esta Parte, las Autoridades Competentes deberán adoptar sin demora las medidas oportunas para asegurar el pago de cualquier importe que deba ser abonado en el país donde se encuentre, de acuerdo con el Convenio.

Las Partes quedarán liberadas de los pagos que realicen en aplicación al Convenio y del presente Acuerdo Administrativo cuando éstos se efectúen en la moneda de su país.

Artículo 20°
Trámite de las prestaciones por fallecimiento

En las solicitudes de prestaciones derivadas del fallecimiento del titular del beneficio, la Entidad Gestora de cada Parte informará en el formulario de correlación únicamente la cuantía de la prestación del causante a su fallecimiento y el monto de la prestación otorgada a sus beneficiarios o causahabientes, sin perjuicio de acompañar la documentación necesaria para acreditar el derecho conforme a la normativa de cada Parte.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES APLICABLES A LOS REGÍMENES DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL O DE RENTAS VITALICIAS PREVISIONALES

Artículo 21°
Disposiciones Especiales relativas al Perú

1. Principio Rector. Para los efectos de determinar las condiciones y requisitos para el reconocimiento, operatividad y materialización de los beneficios otorgados en el ámbito del Sistema Privado de Pensiones peruano resultarán de aplicación las disposiciones legales peruanas. La normativa peruana, con las particularidades establecidas en el presente Acuerdo Administrativo, será aplicable tanto para la totalización de períodos como para la totalización de recursos que hagan financiables las pensiones y beneficios.

2. Regímenes de pensión autogenerados. Los afiliados a una AFP, financiarán sus pensiones jubilatorias con el saldo acumulado en su cuenta individual de capitalización que, de ser el caso, incluye el Bono de Reconocimiento, el mismo que se otorgará en las condiciones que establezcan las disposiciones legales peruanas.

3. Regímenes de cobertura de invalidez, sobrevivencia y fallecimiento. En el caso de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio, la pensión o beneficio, según corresponda, será igualmente financiada con el saldo acumulado en su cuenta individual de capitalización y capital para la pensión, en el marco del modelo de administración de riesgos que resulte aplicable, acorde a la normativa peruana, y con las particularidades establecidas en el presente Acuerdo Administrativo.

Artículo 22°
Rentas Vitalicias Previsionales otorgadas según la Legislación Argentina

Las rentas vitalicias previsionales, otorgadas con anterioridad a la vigencia del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), o las que se otorguen en virtud de la aplicación del Régimen de Riesgos del Trabajo, se adicionarán a las prestaciones previstas por la legislación previsional vigente, cuando el beneficiario reúna los requisitos que establece la misma, aplicándose, en caso de resultar necesario, la totalización de los períodos de seguro a que se refiere el artículo 11° del presente Acuerdo Administrativo.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 23°
Utilización de formularios u otros medios alternativos de comunicación

1. Los modelos de formularios, procedimientos y formalidades necesarios para aplicar el Convenio y el presente Acuerdo Administrativo, serán

establecidos de común acuerdo por los Organismos de Enlace de ambas Partes mediante Acuerdo(s) Complementario(s).

2. Los Organismos de Enlace de ambas Partes podrán utilizar los medios de comunicación que estimen convenientes, en tanto acuerden un procedimiento común de control de la calidad y confiabilidad de la información o documentación transmitida por dichos medios.

Artículo 24°
Confidencialidad de la información

A menos que la normativa de una Parte disponga otra cosa, la comunicación de datos personales, de acuerdo con el Convenio, a la Autoridad Competente, Entidad Gestora, u Organismo de Enlace, de una Parte por parte de la Autoridad Competente, Entidad Gestora u Organismo de Enlace de la otra Parte, será utilizada exclusivamente con el fin de aplicar el Convenio.

Cualquier información recibida por la Autoridad Competente, Entidad Gestora u Organismo de Enlace de una Parte quedará sometida a la normativa de ésta sobre protección de la privacidad y confidencialidad de los datos personales.

Artículo 25°
Solución de Controversias

Cualquier controversia acerca de la interpretación o aplicación de este Acuerdo Administrativo, y demás instrumentos adicionales que se suscriban, se resolverá mediante negociaciones entre las Autoridades Competentes u Organismos de Enlace de las Partes, según corresponda.

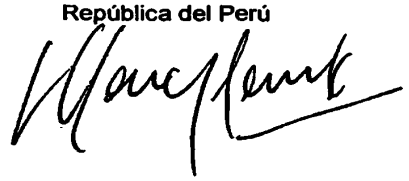
Artículo 26°
Entrada en Vigor

El presente Acuerdo Administrativo entrará en vigor a partir de la fecha de recepción de la segunda notificación por la cual las Partes se comuniquen mediante la vía diplomática el cumplimiento de sus requisitos internos para la entrada en vigor y reconocerá los derechos amparados en el Convenio desde la fecha de su vigencia y tendrá la misma duración.

Hecho en la ciudad de Lima, a 22 días del mes de marzo del año 2010, en dos ejemplares, siendo ambos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la
República Argentina

Por el Gobierno de la
República del Perú



[TRANSLATION – TRADUCTION]

ADMINISTRATIVE AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PERU

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Peru, hereinafter referred to as "the Parties", in accordance with Article 6 of the Convention on Social Security held in Buenos Aires on 17 June 1979 between the Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Peru, called hereinafter "the Convention", have decided to enter into this Administrative Agreement:

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Definitions

1. The terms used in this Administrative Agreement shall have the same meaning as in the Convention, subject to the following provisos:

(a) "Worker" means any person who, as a result of working or having worked as an employed person or as a self-employed person, is or has been subject to the legislation listed in Article 2 of the Convention;

(b) "Pensioner" means, for Peru, persons receiving cash benefits or pensions in their own right or as dependents.

(c) "Beneficiary" means, for Argentina, any person receiving a benefit provided under the applicable legislation referred to in Article 2- of the Convention.

(d) "Rights holder or successor in title" means any person entitled, under the applicable regulations, to receive a death benefit.

(e) "Eligible period of service" means any completed period that is recognized under either Party's legislation, as well as any other period deemed equivalent to an eligible period of service under the legislation of each of the Parties.

(f) "Benefit" means any cash benefit, pension, rent, or assignment as provided by the rules referred to in Article 2 of the Convention, including any complement, supplement or appreciation.

(g) "Private pension system" means, for Peru, the defined-contribution social security system based on principles of individual pension accounts, private property, private management and State supervision, whose benefits are linked to the contributions made by the participant. The benefits include retirement pensions, disability and survivor's benefits and funeral expenses or allowances.

(h) "Recognition bond" means, for Peru, securities denominated in cash and subject to a redemption condition which, under Peruvian law, represents the periods in which

contributions were made to the Peruvian pay-as-you-go system prior to the advent of the individual pension accounts system.

(i) "State-guaranteed pension" means, for Peru, the benefit provided by the State to participants who, before joining the individual pension accounts system, contributed to the Peruvian pay-as-you-go system in accordance with prevailing Peruvian law.

(j) "Special scheme" means, for Argentina, those retirement and pension schemes that change the calculation and mobility of benefits.

(k) "Differential scheme" means, for Argentina, any pensions scheme that reduces requirements due to work that induces premature aging.

(l) "Salaried worker" means a worker whose work is performed under an employment contract, as an employee.

(m) "Self-employed worker" means, for Peru, a worker whose work is performed independently.

(n) "Contract worker" means, for Argentina, a worker who, alone or in association with another, who may or may not be a partner, habitually engages in gainful employment otherwise than as an employee.

2. Any term not defined in this Article shall have the meaning assigned to it in the applicable standards.

Article 2. Competent authorities

In accordance with the provisions of Article 5(a) of the Convention, the competent authorities shall be:

a) For Argentina: the Ministry of Labour, Employment and Social Security.

b) For Peru: The Ministry of Economy and Finance and the Ministry of Labour and Employment Promotion.

Article 3. Management entities

The management entities referred to in Article 5(b) of the Convention shall be:

For Argentina:

- The National Social Security Administration (ANSES).
- Provincial or municipal social security funds or institutes whose schemes were not transferred to the federal government and professionals who deal with pension schemes that cover the contingencies of invalidity, old age and death, whether based on the pay-as-you-go system or on individual pension accounts.
- Medical boards.

For Peru:

- Private pension fund administrators (AFP).
- The Social Security Office (ONP), as regards the Peruvian pay-as-you-go system.
- Insurance companies, as regards pension risks.

- The Private Pension Fund Administrators' Medical Committee (COMAFP) and the Medical Committee of the Banking, Insurance and AFP Superintendency (COMEC), for private pension system participants.
- Such medical committees as shall be designated by ONP.

Article 4. Liaison bodies

The liaison bodies referred to in Article 5(c) of the Convention shall be:

For Argentina:

- The National Social Security Administration (ANSES) as regards the benefits provided by national, provincial, municipal and professional pension schemes, whether based on the pay-as-you-go system or on individual pension accounts.

For Peru:

- The Banking, Insurance and AFP Superintendency (SBS), as regards private pension system participants.
- The Social Security Office (ONP), as regards persons insured under the National Pension System.

2. The liaison bodies referred to in the preceding paragraph shall agree on such additional procedures and forms as may be necessary to implement the Convention and this Administrative Agreement.

Article 5. Field of material application

1. In accordance with the provisions of Article 2 of the Convention, the Administrative Agreement shall apply to social security tax schemes in force in the territory of the Parties.

2. As provided in Article 2(3) of the Convention, the Administrative Agreement shall also apply to the rules governing private pension systems with respect to all benefits provided, and in particular to cash benefits for retirement, disability, survivorships and funeral expenses.

3. The rules of bilateral or multilateral agreements concluded with third States by the Parties shall not affect the application of the rules of this Administrative Agreement.

CHAPTER II. GENERAL PRINCIPLES APPLICABLE

Article 6. Equal treatment

Unless the Administrative Agreement provides otherwise, the persons referred to in Article 1 of the Convention shall have the obligations and rights provided for in the legislation of each Party, under the same conditions as nationals of that Party.

Article 7. Payment of benefits abroad

1. Pursuant to the provisions of Article 22 of the Convention, benefits acquired under the legislation of either Party and paid in the territory of the other Party shall not be subject to any reduction, change, suspension, abolition or retention on account of the fact that the beneficiary is in or is resident in the territory of the other Party, with the exception of the transfer costs necessitated by payment of the financial benefit in the territory of that Party.

2. Benefits recognized under the Convention for workers, pensioners or beneficiaries residing in the territory of a third State shall be paid on the same terms and for the same period of time as those paid to nationals of that third State resident therein.

Article 8. Adding together of periods of insurance

1. When a worker has completed eligible service periods successively or alternately in the territory of both Parties, the management entities will, if necessary, take into account the service periods eligible under the other Party's rules for purposes of acquisition, maintenance or recovery of entitlement to benefits in accordance with its own rules, provided that the periods do not overlap with their own and subject to the characteristics set out in Articles 21 and 22 of this Administrative Agreement.

2. Where it cannot be accurately determined when certain eligible service, contribution or employment periods occurred under the legislation of either Party, it shall be presumed that such periods do not overlap the eligible service, contribution or employment periods completed under the rules of the other Party, and the said periods shall be taken into account to the extent that that gives entitlement to the relevant benefit or an increase thereof.

CHAPTER III. PROVISIONS ON APPLICABLE LAW

Article 9. Exceptions

Pursuant to the provisions of Articles 3 and 4 of the Convention, the following exceptions shall apply to the territorial application of the legislation of each of the Parties:

1. A salaried employee in the service of a company whose headquarters are in the territory of either Party who is posted by that company to the territory of the other Party for temporary duty shall be subject to the legislation of the first Party, provided that the foreseeable duration of the posting does not exceed twelve (12) months and that the employee has not been sent to replace another worker whose posting has ended.

2. If, due to unforeseen circumstances, the duration of the posting referred to in the preceding paragraph should exceed twelve (12) months, the employee will remain subject to the legislation of the first Party for an additional period according to the provisions of the following article.

3. Workers engaged in a self-employed activity in the territory of either Party and covered by insurance there who begin to perform work of the same nature in the territory of the other Party will remain subject to the legislation of the first Party, provided that the foreseeable duration of the work does not exceed twelve (12) months.

4. If, due to unforeseen circumstances, the duration of the work referred to in the preceding paragraph should exceed twelve (12) months, the employee will remain subject to the legislation of the first Party for an additional period according to the provisions of the following article.

5. A person working as a crew member on an aircraft shall, with respect to that work, be subject to the legislation of the Party in whose territory the company he works for has its principal office.

However, if the company has a branch or permanent representation in the territory of the other Party, persons working for that branch or representation shall be subject to the legislation of the Party in whose territory it is domiciled.

6. Salaried workers performing their duties aboard ship shall be subject to the legislation of the Party whose flag the ship is flying.

Notwithstanding the above, where a worker is remunerated for that work by a company or person domiciled in the territory of the other Party, and resides therein, the worker shall remain subject to the legislation of the said Party; the company or person paying the remuneration shall be considered the employer with respect to the application of that legislation.

7. Workers employed in loading, unloading, ship repair and as watchmen at the port shall be subject to the legislation of the Party to whose territory the port belongs.

8. Members of diplomatic missions and consular offices shall be governed by the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963, subject to the provisions of the following paragraphs of this Article.

9. Administrative and technical staff and members of the service staff of diplomatic missions and consular offices of each of the Parties, and private service personnel of the members of such missions and offices may choose to be subject to the legislation of either Party, provided they are nationals of the sending State or have been subject to its legislation.

That choice must be made within three (3) months of the entry into force of this Administrative Agreement or, as the case may be, within three (3) months of the date they commence work in the territory of the receiving State.

If the choice is not made within the specified time, the legislation of the sending State shall apply to the persons covered by this paragraph.

10. Where the diplomatic mission or consular office of either Party employs persons who, pursuant to paragraph 9, are subject to the legislation of the other Party, the said mission or office shall fulfil the obligations imposed on employers by the legislation of the latter Party.

11. Public officials and comparable personnel of either Party sent to perform their duties in the territory of the other Party shall be subject to the legislation of the Party in whose administration they serve.

12. Officials of international organizations shall be governed, for Social Security purposes, by the legislation and the international treaties and conventions to which they are subject.

Article 10. Temporary transfers

1. Where the legislation of either Party is applicable pursuant to Article 3(1)(a) of the Convention, the liaison body, for Argentina, and the competent authority, for Peru, shall, at the request of the employer and at least thirty (30) days prior to the date on which the transfer is to be made, issue a certificate attesting that the employee is covered by that legislation and stating the certificate's period of validity. The certificate will serve as proof that the employee is exempt from the coverage mentioned.

2. Where the legislation of either Party is applicable pursuant to Article 9(3) of this Agreement, the liaison body, for Argentina, and the competent authority, for Peru, shall, at the request of the self-employed worker and at least thirty (30) days prior to the date on which the transfer is to be made, issue a certificate indicating that the employee is covered by that legislation and spelling out the certificate's period of validity. That certificate will serve as proof that the employee is exempt from the coverage mentioned.

3. The certificate referred to in paragraphs 1 and 2 shall be issued:

a) in Argentina, by the National Social Security Administration (ANSES);

b) in Peru, by the Ministry of Labour and Employment Promotion.

4. The liaison body or competent authority of the Party issuing the certificate referred to in paragraphs 1 and 2 shall submit a copy thereof to the other Party's liaison body or competent authority, as applicable, for information. It shall also deliver a copy of the certificate to the employee transferred.

5. In the case of an extended transfer, the employer or self-employed worker, as the case may be, shall, at least thirty (30) days before the end of the period of twelve (12) months, send a request for extension to the institution that issued the certificate referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article. That institution shall seek the consent of the liaison body or competent authority, as the case may be, of the Party into whose territory the transfer has occurred, and once that consent has been obtained, shall issue a new certificate stating the period of extension.

CHAPTER IV. PROVISIONS RELATING TO BENEFITS

Article 11. Adding together of benefit periods

When a person has been subject to the legislation of both Parties, without prejudice to the special provisions of Articles 21 and 22 of this Administrative Agreement, benefits shall be granted according to the following provisions:

1. Each Party's management entity shall determine eligibility and calculate the benefit, taking into account only periods of eligible service in accordance with its own regulations.

2. When the determination referred to in the preceding paragraph is not possible, each Party's management entity shall determine eligibility for benefit by adding up the periods of eligible service under the regulations of both Parties. When, after this addition, entitlement to benefits has been established, the amount to be paid shall be calculated by applying the following rules:

a) The theoretical amount of benefit shall be calculated as if all eligible service periods had been completed under its own legislation (theoretical benefit).

b) Given the theoretical amount calculated in subparagraph a) the amount of the corresponding benefit shall be determined by establishing pro rata periods of eligible service under its own legislation based on the total periods of eligible service (time-based pro rata benefit).

3. Once entitlement is determined as laid down in paragraphs 1 and 2 herein, each Party's management entity shall recognize and pay the benefit more advantageous to the person concerned, unless the latter specifically requests deferral of payment of the benefit under either applicable set of regulations.

4. If the regulations of either of the Parties require a maximum duration of periods of eligible service for recognition of full benefit entitlement, that Party's management entity shall, in calculating the benefit, take into account only as many of the other Party's contribution periods as are necessary to achieve that full benefit entitlement. The above provisions shall not be valid for benefits the amount of which is not based on periods of eligible service and on the provisions of Articles 21 and 22.

Article 12. Periods of eligible service of less than one year

1. Notwithstanding the provisions of Article 11 of this Administrative Agreement, where the total duration of the periods of eligible service under either Party's regulations is short of one year and, under those regulations, there is no benefit entitlement, the management entity of that Party shall not recognize any benefit for that period.

The aforementioned periods will be taken into account, if necessary, by the other Party's management entity in recognizing entitlement and determining the amount of the benefit under its own regulations, but that entity shall not apply the provisions of Article 11.

1. Notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, periods of less than one year accredited under the regulations of both Parties may be added up by the Party in which the person concerned meets the requirements for benefit. Should the person be entitled to benefit from both, it shall be paid only by the Party where the worker's dues were most lately paid. In such cases, the provisions of Article 11 of this Administrative Agreement shall not apply to payment of the benefit.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 above shall not apply to benefits the amount of which is not based on a given number of periods of eligible service, subject to the provisions of Articles 21 and 22 of this Administrative Agreement.

Article 13. Conditions for recognition of entitlement to benefits

1. If the legislation of either Party makes the granting of the benefits regulated by this Chapter conditional on the worker having been subject to its legislation rules at the time of the event giving rise to the benefit, that condition shall be deemed to have been fulfilled if, at that time, the worker was insured under the legislation of the other Party or, in lieu of that, is receiving a benefit from that Party on the basis of his own periods of eligible service.

For the recognition of survivors' pensions or death benefits, the status of the deceased as either an enrolled person or a pensioner or beneficiary shall, if necessary, be taken into consideration in accordance with the regulations of the other Party.

2. If the legislation of either Party requires, with a view to recognition of a benefit, that periods of eligible service should have been completed during a particular period immediately prior to the event giving rise to the benefit, that condition shall be deemed to have been fulfilled if the person concerned completes them during the period immediately prior to recognition of the benefit in the other Party.

3. The clauses concerning reduction, suspension or elimination provided for in the legislation of either Party in the case of retired persons and/or pensioners who are engaged in gainful employment shall be applicable to them even though they may carry on that employment in the territory of the other Party.

Article 14. Insurance periods applicable apply to certain activity schemes

When the legislation of either Party makes the granting of certain benefits conditional on the periods of eligible service having been completed in a given activity or occupation, only those periods of eligible service in the same activity or occupation recognized in the other Party will be taken into account in determining entitlement to benefits. Should the sum of the periods of eligible service be insufficient for the granting of a benefit, those periods shall be taken into account under the general scheme or another special scheme under which the person concerned could become eligible for entitlement.

Article 15. General processing of benefit claims

1. The management entity of the Party having primary responsibility for benefit processing under the provisions of Title II, Chapter 3 of the Convention may apply to the liaison body of the other Party for any documentation or other information required to complete the application.

2. The management entity of the Party receiving a benefit application made to the management entity of the other Party may apply to the liaison body of that Party for any documentation or other information required to complete the application.

3. The management entity of the Party having primary responsibility for benefit processing may verify the relevant information as well any information provided by applicant's family group. The nature of the information to be verified shall be determined

jointly by the liaison bodies of both Parties. The purpose of that verification is to obviate mutual referrals of supporting documentation.

Article 16. Determination of disability

1. To determine the percentage reduction in earning capacity for the purposes of granting disability benefits, the management entity of each of the Parties shall make an assessment under applicable law.

2. To implement the provisions of the preceding paragraph, the management entity of the Party in whose territory the worker resides shall make available to the management entity of the other Party, upon request and free of charge, such reports and medical documents as it has in its possession.

3. At the request of the management entity of the Party whose legislation applies, the management entity of the Party in whose territory the applicant resides shall perform the necessary medical examinations to assess the applicant's condition. Medical tests that are done only in the interest of the entity first mentioned above shall be entirely for the account of that entity.

4. The cost of the additional medical examinations referred to in the preceding paragraph shall be refunded promptly after receipt of the details of the expenses incurred. Refunds shall be paid made through each Party's liaison bodies or management entities, as applicable.

Article 17. Specific rules on benefits

1. The benefits provided under the rules of the Convention shall be updated or revalued on the same schedule and in the same amounts as the benefits provided under domestic law.

2. Unless this Administrative Agreement otherwise provides, the benefits granted by aggregating periods of eligible service, within the meaning of the Convention, shall correspond to the minimum benefits guaranteed by each Party, and the amount thereof shall be determined in accordance with the rules of each Party and in proportion to the time actually worked in each Party's territory.

Article 18. Funeral allowances

1. Funeral allowances shall be governed by the legislation of the Party applicable to the worker at the time of his death.

2. In the case of pensioners or beneficiaries entitled to benefits under the legislation of both Parties, the granting thereof shall be regulated by the legislation of the Party in whose territory the worker, beneficiary or pensioner resided.

3. Where the residence of the beneficiary or pensioner was in a third country, the applicable legislation, should he have been entitled to benefits from both Parties, shall be that of the Party where he was last insured.

Article 19. Currency and guarantee of payment of benefits

In the event that a Party institutes foreign exchange controls or other similar measures that restrict payments, remittances or transfers of funds or other financial instruments to persons outside that Party's territory, the competent authorities shall without delay take appropriate measures to ensure payment of any amount owing to such persons in the country where they are, in accordance with the Convention.

Payment of a benefit by either Party under the Convention and this Administrative Agreement shall be deemed to have been validly made when it has been made in its national currency.

Article 20. Processing of death benefits

In benefit applications made upon the death of the benefit holder, the management entity of each Party shall report on the appropriate form only the amount of the holder's benefit at the time of his death and the amount of the benefit granted to his survivors or successors in title, while the necessary documentation for establishing entitlement under the legislation of each Party shall be provided.

CHAPTER V. PROVISIONS APPLICABLE TO INDIVIDUAL PENSION ACCOUNTS OR ANNUITIES

Article 21. Special provisions relating to Peru

1. Guiding principle. For purposes of determining the conditions and requirements for the recognition, operation and payment of the benefits granted under the Peruvian Private Pension System, Peruvian law shall be applicable. Peruvian legislation, with the specifics set out in this Administrative Agreement, shall apply both to the aggregation of periods and to the aggregation of resources to make pensions and benefits fundable.

2. Self-generated pension schemes. AFP participants will finance their retirement pensions out of the accumulated balance in their individual pension accounts, which, if appropriate, will include the Recognition Bond, which shall be granted under the conditions laid down in Peruvian law.

3. Schemes for disability coverage, survivor's and death benefits In the case of disability pensions, survivor's benefits and funeral expenses, the pension or benefit, as the case may be, will also be funded out of the accumulated balance in their individual pension accounts, under the applicable risk management model and in accordance with Peruvian law and the specifics set out in this Administrative Agreement.

Article 22. Annuities granted under Argentine pensions legislation

Life annuities granted prior to the coming into force of Argentina's integrated social security system (SIPA), as well as those to be granted by virtue of the workers' compensation system, will be added to the benefits provided by the current pensions legislation where the beneficiary meets the requirements of the same, applying, if

necessary, the aggregation of insurance periods referred to in Article 11 of this Administrative Agreement.

CHAPTER VI. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 23. Use of forms or other alternative means of communication

1. Model forms, procedures and formalities needed for the application of the Convention and this Administrative Agreement shall be established jointly by both Parties' liaison bodies through one or more supplementary agreements.

2. Both Parties' liaison bodies may use the communications media of their choice so long as they agree on a common procedure to ensure the reliability and quality control of the information or documents so transmitted.

Article 24. Confidentiality of information

Unless the legislation of a Party provides otherwise, the communication of personal data, in accordance with the Convention, to either Party's competent authority, management entity or liaison body by the other Party's competent authority, liaison body or management entity shall take place exclusively for the purpose of implementing the Convention.

Any information received by either Party's competent authority, liaison body or management entity shall be subject to that Party's legislation on privacy and confidentiality of personal data.

Article 25. Dispute settlement

Any dispute regarding the interpretation or application of this Administrative Agreement and such additional instruments as may be agreed to shall be settled through negotiations between the Parties' competent authorities or liaison bodies, as appropriate.

Article 26. Entry into force

This Administrative Agreement shall enter into force as of the date of receipt of the second notification by which the Parties notify each other through the diplomatic channel of the fulfilment of their domestic requirements for its entry into force; it shall recognize the rights protected by the Convention as of the date of its entry into force and shall be of the same duration.

DONE at Lima on 22 May 2010 in two Spanish originals, both being equally authentic.

For the Government of the Argentine Republic:

For the Government of the Republic of Peru:

[TRANSLATION – TRADUCTION]

ACCORD ADMINISTRATIF CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ACCORD RELATIF À LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU

Le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République du Pérou, ci-après dénommés les « Parties »,

Conformément à l'article 6 de l'Accord relatif à la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République argentine et le Gouvernement de la République du Pérou, signé le 17 juin 1979 à Buenos Aires, ci-après dénommé « l'Accord »,

Ont décidé de conclure le présent Accord administratif :

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Définitions

1. Les termes utilisés dans cet Accord administratif ont le même sens que celui qui leur est attribué dans l'Accord, avec les spécificités visées ci-après :

a) Le terme « travailleur » désigne toute personne qui, à la suite d'une activité exercée pour son compte ou pour celui de quelqu'un d'autre, est ou a été soumise aux dispositions législatives mentionnées à l'article 2 de l'Accord.

b) Le terme « retraité » désigne, dans le cas du Pérou, toute personne qui, de plein droit ou au regard du droit dérivé, bénéficie de prestations en espèces ou d'une retraite.

c) Le terme « bénéficiaire » désigne, dans le cas de l'Argentine, toute personne qui reçoit une prestation prévue par sa propre législation et visée à l'article 2 de l'Accord.

d) Le terme « ayant droit » désigne toute personne qui, en vertu de sa législation, a le droit de percevoir une pension en raison du décès d'un assuré.

e) L'expression « période de service admissible » désigne toute période de cotisation qui a été reconnue et complétée sous la législation d'une Partie, ainsi que toute autre période considérée comme équivalente à une période de service admissible prévue par la législation de chacune des Parties.

f) Le terme « prestation » désigne toute prestation en espèces, toute pension, tout revenu ou toute allocation prévu par les dispositions législatives mentionnées à l'article 2 de l'Accord, y compris tout complément, majoration ou revalorisation.

g) L'expression « système privé de retraite » désigne, dans le cas du Pérou, le système de sécurité sociale à cotisations définies, fondé sur des principes de capitalisation individuelle, la propriété privée, l'administration privée, le contrôle de l'État et dont les prestations sont liées aux apports de l'affilié. Les prestations sont celles de la retraite, d'invalidité, de survie, des frais funéraires ainsi que d'allocations décès.

h) L'expression « bon de reconnaissance » désigne, dans le cas du Pérou, les titres monétaires soumis à une condition de remboursement qui, conformément à la législation péruvienne, correspondent aux périodes de cotisation effectuées dans le système de répartition péruvien, avant l'intégration au système de capitalisation individuelle.

i) L'expression « retraite avec garantie de l'État » désigne, dans le cas du Pérou, la prestation accordée par l'État aux affiliées qui, avant l'intégration au système de capitalisation individuelle, ont cotisé au système de répartition péruvien, conformément à la législation péruvienne en vigueur.

j) L'expression « régime spécial » désigne, dans le cas de l'Argentine, les régimes de retraites et de pensions qui modifient le calcul et de la mobilité des prestations.

k) L'expression « régime différentiel » désigne, dans le cas de l'Argentine, les régimes de retraites et de pensions qui réduisent les conditions en raison des tâches déterminantes de la vieillesse anticipée.

l) L'expression « travailleur salarié » désigne tout travailleur qui, lié par un contrat de travail et une relation de dépendance, fournit ses services.

m) L'expression « travailleur non salarié » désigne, dans le cas du Pérou, tout travailleur qui exerce une activité professionnelle de manière indépendante.

n) L'expression « travailleur indépendant » désigne, dans le cas de l'Argentine, tout travailleur qui, seul ou alternativement avec une autre personne, associé ou non, exerce habituellement une activité lucrative qui n'implique pas une relation de dépendance.

2. Tout terme non défini dans le présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.

Article 2. Autorités compétentes

Conformément aux dispositions du sous-alinéa a) de l'article 5 de l'Accord, les autorités compétentes sont :

a) En ce qui concerne l'Argentine : le Ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.

b) En ce qui concerne le Pérou : le Ministère de l'économie et des finances et le Ministère du travail et de la promotion de l'emploi.

Article 3. Entités gestionnaires

Les entités gestionnaires visées au sous-alinéa b) de l'article 5 de l'Accord sont :

Pour l'Argentine :

- L'Administration nationale de la sécurité sociale.

- Les C1ai1sses ou instituts de prévoyance et de sécurité sociale provinciaux ou municipaux, dont les régimes n'ont pas été transférés à l'État, ainsi que de professionnels en ce qui concerne les régimes de retraite et de pension qui couvrent les éventualités d'invalidité, de vieillesse et décès, fondés sur le système de répartition ou sur la capitalisation.

- les Commissions médicales.

Pour le Pérou :

- Les administrations privées de fonds de retraite.

- Le Bureau de la normalisation de la prévoyance en ce qui concerne le système de répartition péruvien.

- Les entreprises d'assurance en ce qui concerne les risques prévisionnels.

- Le Comité médical des administrations privées des fonds de retraite et le Comité médical de la Surintendance des banques, des compagnies d'assurance et des caisses de retraite pour les affiliés au système privé de retraite.

- Les Commissions médicales désignées par le Bureau de la normalisation de la prévoyance.

Article 4. Organismes de liaison

1. Les organismes de liaison visés au sous-alinéa c) de l'article 5 de l'Accord sont :

Pour l'Argentine :

- L'Administration nationale de la sécurité sociale en ce qui concerne les prestations prévues par les régimes de retraite et de pension nationaux, provinciaux, municipaux et de professionnels, fondés sur le système de répartition ou sur la capitalisation.

Pour le Pérou :

- La Surintendance des banques, des compagnies d'assurance et des caisses de retraite pour les affiliés au système privé de retraite.

- Le Bureau de normalisation de la prévoyance pour les assurés au système national de retraite.

2. Les organismes de liaison susmentionnés établissent d'un commun accord les procédures complémentaires et les formulaires requis pour l'application du présent Accord administratif.

Article 5. Champ d'application matériel

1. Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'Accord, le présent Accord administratif s'applique aux régimes contributifs de sécurité sociale en vigueur sur le territoire des Parties.

2. En vertu des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'Accord, le présent Accord administratif s'applique également aux règles relatives au système privé de pensions, en ce qui concerne tous les avantages qu'il confère, en particulier, les prestations de retraite, d'invalidité, de survivants et de frais funéraires.

3. Les règles des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par les Parties avec des États tiers n'affectent pas l'application des règles du présent Accord administratif.

CHAPITRE II. PRINCIPES GÉNÉRAUX APPLICABLES

Article 6. Principe d'égalité de traitement

Sauf disposition contraire du présent Accord administratif, les personnes visées à l'article 1 de l'Accord ont les mêmes obligations et droits que ceux que la législation de chaque Partie accorde ou impose à ses ressortissants.

Article 7. Exportation des prestations

1. Compte tenu de l'article 22 de l'Accord, les prestations accordées conformément à la législation d'une Partie et versées sur le territoire de l'autre Partie ne font l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou retenue du fait que le bénéficiaire se trouve ou réside sur le territoire de l'autre Partie, exception faite des dépenses liées à un transfert exigeant le versement de la prestation sur le territoire de cette Partie.

2. Les prestations reconnues sur la base de l'Accord aux travailleurs, aux retraités, ainsi qu'aux bénéficiaires qui résident sur le territoire d'un État tiers, sont versées dans les mêmes conditions et pour la même période que celles accordées aux ressortissants qui résident dans ledit État tiers.

Article 8. Totalisation des périodes d'assurance

1. Lorsqu'un travailleur a accompli des périodes de services admissibles successivement ou alternativement sur le territoire des deux Parties, les entités gestionnaires prennent en considération, s'il y a lieu, les périodes de services admissibles conformément à la législation de l'autre Partie aux fins de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations conformément à sa propre législation, à condition que ces périodes ne se superposent pas avec les siennes et compte tenu des particularités prévues aux articles 21 et 22 du présent Accord administratif.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer de façon précise à quelle époque ont été accomplies certaines périodes de services admissibles, de cotisation ou d'emploi sous la législation de l'une des Parties, il sera présumé que ces périodes ne se superposent pas avec des périodes de services admissibles, de cotisation ou d'emploi accomplies sous la législation de l'autre Partie et elles seront prises en compte dans la mesure où leur calcul permet l'accès à la prestation correspondante ou son amélioration.

CHAPITRE III. DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article 9. Exceptions

Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de l'Accord, sont établies les exceptions suivantes au principe de l'application territoriale de la législation de chacune des Parties :

1. Le travailleur qui exerce une activité salariée au service d'une entreprise dont le siège se trouve sur le territoire de l'une des Parties et qui est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y accomplir un travail déterminé demeure soumis à la législation de la première Partie, à condition que la durée prévisible du travail ne dépasse pas douze (12) mois et qu'il n'ait pas été envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de sa période de détachement.

2. Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà des douze (12) mois initialement prévus, le travailleur reste soumis à la législation de la première Partie pour une nouvelle période, conformément à l'article suivant.

3. Le travailleur qui exerce normalement une activité indépendante sur le territoire de l'une des Parties où il est assuré et qui exerce temporairement, pour son compte, cette même activité sur le territoire de l'autre Partie demeure soumis à la législation de la première Partie, à condition que la durée prévisible de l'activité temporaire n'excède pas douze (12) mois.

4. Si la durée du travail à effectuer se prolonge en raison de circonstances imprévisibles au-delà des douze (12) mois initialement prévus, le travailleur reste soumis à la législation de la première Partie pour une nouvelle période, conformément à l'article suivant.

5. Une personne travaillant comme membre de l'équipage d'un aéronef est, eu égard à cet emploi, soumise à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l'entreprise qui l'emploie a son siège.

Toutefois, si l'entreprise a une succursale ou une représentation permanente sur le territoire de l'autre Partie, la personne travaillant pour cette succursale ou cette représentation est soumise à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle est domiciliée.

6. Le travailleur qui exerce une activité salariée à bord d'un navire est soumis à la législation de la Partie du pavillon.

Nonobstant ce qui précède, lorsque le travailleur est rémunéré pour cette activité par une entreprise ou une personne qui a son domicile sur le territoire de l'autre Partie, il sera soumis à la législation de cette dernière, s'il réside sur son territoire. L'entreprise ou la personne qui paye la rétribution est considérée comme l'employeur aux fins de l'application de ladite législation.

7. Les travailleurs employés pour des travaux de chargement, de déchargement, de réparation de navires et de services de surveillance dans un port sont soumis à la législation de la Partie du territoire à laquelle le port appartient.

8. Les membres du personnel des missions diplomatiques et des bureaux consulaires sont régis par les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, et de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, sans préjudice des dispositions des alinéas suivants du présent article.

9. Le personnel administratif et technique, les membres du personnel de service des missions diplomatiques et des bureaux consulaires de chacune des Parties, ainsi que le personnel au service privé des membres de ces missions diplomatiques et bureaux consulaires, peuvent opter pour l'application de la législation de l'une quelconque des

Parties, à condition qu'ils soient des ressortissants de l'État accréditant ou qu'ils aient été soumis à sa législation.

Cette option doit être faite dans les trois (3) premiers mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord administratif ou, selon le cas, dans les trois (3) mois suivant la date de début de travail sur le territoire de l'État accréditaire.

Si cette option n'est pas exercée pendant la période prévue, la législation de l'État accréditant s'applique aux personnes visées par cet alinéa.

10. Lorsque la mission diplomatique ou le bureau consulaire de l'une des Parties engage des personnes qui, conformément à l'alinéa 9, sont soumises à la législation de l'autre Partie, la mission ou le bureau consulaire doit s'acquitter des obligations imposées aux employeurs par la législation de la Partie précitée.

11. Les fonctionnaires et le personnel assimilé d'une Partie contractante qui sont en mission sur le territoire de l'autre Partie restent soumis à la législation de la Partie à laquelle appartient l'administration auprès de laquelle ils sont attachés.

12. En ce qui concerne la sécurité sociale, les fonctionnaires des organismes internationaux sont régis par les réglementations, les traités et les accords internationaux qui leur sont applicables.

Article 10. Transferts temporaires

1. Lorsque la législation d'une Partie est applicable conformément à la disposition du sous-alinéa a) de l'alinéa 1 de l'article 3 de l'Accord, l'organisme de liaison, dans le cas de l'Argentine, et l'autorité compétente, dans le cas du Pérou, doit, à la demande de l'employeur et au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le transfert doit avoir lieu, délivrer un certificat qui atteste que le travailleur salarié est couvert par la législation précitée et qui indique par ailleurs la durée de validité dudit certificat. Ce certificat peut permettre de vérifier que le travailleur salarié est exempté de la couverture susmentionnée.

2. Lorsque la législation d'une Partie est applicable conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 9 du présent Accord administratif, l'organisme de liaison, dans le cas de l'Argentine, et l'autorité compétente, dans le cas du Pérou, doit, à la demande du travailleur indépendant et au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le transfert doit avoir lieu, délivrer un certificat qui atteste qu'il est couvert par la législation précitée et qui indique par ailleurs la durée de validité dudit certificat. Ce certificat peut permettre de vérifier que le travailleur indépendant est exempté de la couverture susmentionnée.

3. Le certificat visé aux alinéas 1 et 2 est délivré :

a) Dans le cas de l'Argentine, par l'Administration nationale de la sécurité sociale;

b) dans le cas du Pérou, par le Ministère du travail et de la promotion de l'emploi.

4. L'organisme de liaison ou l'autorité compétente de la Partie qui a délivré le certificat mentionné aux alinéas 1 et 2 adresse une copie du document à l'organisme de liaison ou à l'autorité compétente de l'autre Partie pour qu'il ou elle en prenne connaissance. En outre, il ou elle doit remettre une copie de ce certificat au travailleur transféré.

5. Au cas où le transfert est prolongé, l'employeur, le travailleur non salarié ou le travailleur indépendant, selon le cas, transmet à cet effet une demande à l'institution ayant délivré le certificat mentionné aux alinéas 1 et 2 du présent article, au moins trente (30) jours avant l'échéance de la période de douze (12) mois. Cette institution demande le consentement de l'organisme de liaison ou de l'autorité compétente, selon le cas, de la Partie vers le territoire de laquelle le transfert est effectué, par l'intermédiaire de l'organisme de liaison ou de l'autorité compétente de cette même Partie. Après avoir obtenu le consentement, elle émet un nouveau certificat indiquant la période de prorogation.

CHAPITRE IV. DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS

Article 11. Totalisation des périodes

Sans préjudice des particularités prévues aux articles 21 et 22 du présent Accord administratif, lorsqu'une personne est soumise à la réglementation des deux Parties, les prestations sont accordées selon les dispositions suivantes :

1. L'entité gestionnaire de chaque Partie détermine le droit à la pension et établit le montant de la prestation en prenant uniquement en compte les périodes de service pouvant être prises en compte conformément à la réglementation de cette Partie.

2. Lorsque les situations prévues à l'article précédent ne se produisent pas, l'entité gestionnaire de chaque Partie détermine le droit à la prestation en totalisant les périodes de service pouvant être prises en compte conformément à la réglementation des deux Parties. Une fois la totalisation effectuée et le droit à la prestation déterminé, il convient d'appliquer les règles suivantes pour calculer le montant à payer :

a) Déterminer le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes de service entrant en ligne de compte avaient été versées conformément aux dispositions de sa propre législation (prestation théorique).

b) Le montant de la prestation est établi en appliquant au montant théorique calculé conformément à l'alinéa a) la même proportion entre la durée des périodes de services admissibles sous sa législation et le total des périodes de services admissibles (prestation prorata temporis).

3. Une fois les droits déterminés conformément aux alinéas 2 et 3 du présent article, l'institution compétente de chaque Partie reconnaît et accorde à l'intéressé la prestation la plus favorable, à moins que celui-ci ne demande expressément de surseoir à la liquidation de la prestation en vertu de la législation de l'une ou l'autre législation applicable.

4. Si la législation de l'une des Parties exige une durée maximale de périodes de services admissibles pour donner droit à une prestation complète, l'entité gestionnaire de cette Partie prendra en compte, aux fins de calcul de la prestation, les seules périodes de services admissibles portées au crédit dans l'autre Partie qui sont nécessaires pour donner droit à ladite prestation. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux prestations dont le montant n'est pas déterminé en fonction des périodes de services admissibles et selon les particularités énumérées aux articles 21 et 22.

Article 12. Périodes de services admissibles de moins d'un an

1. Nonobstant les dispositions de l'article 11 du présent Accord administratif, lorsque la durée totale des périodes de services admissibles sous la législation d'une Partie contractante n'atteint pas un an et que, conformément à la législation de ladite Partie, aucun droit à prestation n'est acquis, l'entité gestionnaire de cette Partie n'accorde aucune prestation à raison de ladite période.

Les périodes susmentionnées sont prises en compte, s'il y a lieu, par l'entité gestionnaire de l'autre Partie contractante aux fins de la reconnaissance du droit à prestation et du calcul du montant de celle-ci, selon la législation de cette Partie. Toutefois, cette dernière n'applique pas les dispositions de l'article 11.

2. En dépit des dispositions de l'alinéa précédent, les périodes inférieures à un an accréditées sous la législation des deux Parties peuvent être totalisées par la Partie sur le territoire de laquelle l'intéressé remplit les conditions requises pour bénéficier de la prestation. Si le droit à ladite prestation est ouvert sous la législation des deux Parties, la prestation est reconnue uniquement par la Partie sur le territoire de laquelle le travailleur verse ses dernières cotisations. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas pour liquider la prestation.

3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas aux prestations dont le montant n'est pas déterminé en fonction d'un nombre de périodes de services admissibles et selon les particularités énumérées aux articles 21 et 22 du présent Accord administratif.

Article 13. Conditions générales pour l'ouverture du droit aux prestations

1. Dans le cas où, en vertu de la législation d'une Partie, les prestations visées au présent chapitre ne sont accordées que si le travailleur était assujetti à ladite législation au moment où s'est produit l'évènement ouvrant droit à prestation, cette condition est réputée remplie lorsque, au moment considéré, le travailleur est assuré en vertu de la législation de l'autre Partie contractante ou, à défaut, lorsqu'il recevra une prestation de cette Partie, basée sur ses propres périodes de services admissibles.

Pour la reconnaissance des pensions de réversion ou de décès, il sera tenu compte, s'il y a lieu, de la situation de l'intéressé, à savoir s'il exerçait une activité ou était à la retraite, conformément à la législation de l'autre Partie.

2. Si la législation d'une Partie exige, pour que la prestation soit reconnue, qu'aient été accomplies des périodes de services admissibles à un moment déterminé précédant immédiatement l'évènement ouvrant droit aux prestations, cette condition est réputée remplie si lesdites périodes ont été accomplies pendant la période précédant immédiatement la reconnaissance de la prestation sur le territoire de l'autre Partie.

3. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation de l'une des Parties dans le cas des retraités ou bénéficiaires qui exerceraient une activité professionnelle leur seront applicables même s'ils exercent cette activité sur le territoire de l'autre Partie contractante.

Article 14. Périodes d'assurance à appliquer à des régimes d'activités déterminées

Lorsque la législation de l'une des Parties subordonne l'octroi de certaines prestations à condition que les périodes de services admissibles aient été accomplies dans une activité ou profession déterminée, seules les périodes de services admissibles reconnues dans la même activité ou profession dans l'autre Partie ne sont prises en compte pour la détermination du droit à ces prestations. Si la somme des périodes de services admissibles ne permet pas de bénéficier des prestations, ces périodes sont prises en compte au titre du régime général ou d'un autre régime spécial auquel l'intéressé pourrait prétendre.

Article 15. Traitement général des demandes de prestations

1. L'entité gestionnaire de la Partie qui intervient en premier lieu dans le traitement des prestations conformément au chapitre 3 du titre II de l'Accord, peut demander à l'organisme de liaison de l'autre Partie toute documentation ou information nécessaire pour compléter la demande.

2. L'entité gestionnaire de la Partie qui reçoit une demande de prestation présentée par l'entremise de l'entité gestionnaire de l'autre Partie, peut demander à l'organisme de liaison de ladite Partie toute documentation ou information nécessaire pour compléter la demande.

3. L'entité gestionnaire de la Partie qui intervient en premier lieu dans le traitement des prestations peut vérifier l'exactitude des informations pertinentes portant sur le demandeur ainsi que sur sa famille. La nature des informations à vérifier est déterminée d'un commun accord entre les organismes de liaison des deux Parties. Cette vérification a pour objet de remplacer le renvoi de la documentation qui a appuyé cette dernière.

Article 16. Détermination de l'invalidité

1. Pour la détermination de la réduction de la capacité de travail aux fins d'octroi des prestations correspondantes d'invalidité, l'entité gestionnaire de chacune des Parties effectue son évaluation conformément à la législation qu'elle applique.

2. Aux fins d'application de l'alinéa précédent, l'entité gestionnaire de chacune des Parties sur le territoire de laquelle réside le travailleur, met à la disposition de l'entité gestionnaire de l'autre Partie, sur demande de celle-ci et sans frais, les rapports et documents médicaux qu'elle détient.

3. À la demande de l'entité gestionnaire de la Partie dont la législation s'applique, l'entité gestionnaire de la Partie sur le territoire de laquelle réside le demandeur fait procéder aux examens médicaux nécessaires à l'évaluation de la situation du demandeur. La première entité susmentionnée prend intégralement en charge les frais liés aux examens médicaux, ces derniers revêtant un intérêt pour elle seule.

4. Les frais afférents aux examens médicaux susmentionnés sont remboursés dans les plus brefs délais dès réception des justificatifs détaillés de ces dépenses. Chaque Partie procède aux remboursements par l'intermédiaire des organismes de liaison ou des entités gestionnaires, selon le cas.

Article 17. Règles spécifiques relatives aux prestations

1. Les prestations reconnues par application des normes de l'Accord sont actualisées ou revalorisées selon la même périodicité et pour les mêmes sommes que les prestations reconnues dans le cadre de la législation interne.

2. Sauf disposition contraire du présent Accord administratif, les prestations qui sont reconnues par la totalisation des périodes de services admissibles visées par l'Accord, ont droit à des garanties de prestations minimales de chaque Partie, le montant de ces dernières étant déterminé selon la réglementation de chaque Partie et proportionnellement au temps effectivement accompli dans chacune d'elles.

Article 18. Allocations décès

1. Les allocations décès sont régies par la législation de la Partie qui s'appliquerait au travailleur à la date de son décès.

2. Dans le cas des retraités ou des bénéficiaires qui auraient droit aux prestations par application de la législation des deux Parties, la reconnaissance de celles-ci est régie par la législation de la Partie sur le territoire de laquelle résidait le travailleur, le bénéficiaire ou le retraité.

3. Si le bénéficiaire ou retraité résidait dans un pays tiers, la législation qui s'applique, au cas où il aurait droit aux prestations dans les deux Parties, serait celle de la Partie où il était assuré pour la dernière fois.

Article 19. Devise et garantie du versement des prestations

Conformément à l'Accord, au cas où une Partie met en place des contrôles de devises ou d'autres mesures similaires qui limitent les paiements, les envois ou les transferts de fonds ou d'autres instruments financiers aux personnes se trouvant en dehors de cette Partie, les autorités compétentes doivent prendre sans tarder les mesures appropriées pour assurer le paiement de tout montant devant être versé dans le pays où elles se trouvent.

Les Parties sont exemptées des paiements effectués en vertu de l'Accord et du présent Accord administratif lorsque ceux-ci sont opérés dans la monnaie nationale.

Article 20. Traitement des prestations en cas de décès

L'entité gestionnaire de chaque Partie précise dans le formulaire de demande de prestations résultant du décès du titulaire de la pension uniquement le montant de la prestation du défunt au moment de son décès ainsi que le montant de la prestation accordée à ses bénéficiaires ou ayants droit. Elle y joint également les documents nécessaires pour établir leur droit conformément à la législation de chaque Partie.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RÉGIMES PAR CAPITALISATION INDIVIDUELLE OU. DE RENTES VIAGÈRES PRÉVISIONNELLES

Article 21. Dispositions spéciales relatives au Pérou

1. Principe directeur

En vue de déterminer les conditions et modalités en matière de reconnaissance, d'efficacité et de réalisation des avantages accordés dans le domaine du système privé de retraite péruvien, les dispositions législatives péruviennes sont applicables. La légalisation péruvienne, de même que les spécificités établies dans le présent Accord administratif, sont applicables pour la totalisation des périodes ainsi que pour la totalisation des ressources qui permettent le financement des retraites et des avantages.

2. Régimes de retraite auto-produits

Les affiliés à une administration privée de fonds de retraite financent leur retraite avec le solde cumulé sur leur compte individuel de capitalisation qui, le cas échéant, comprend le bon de reconnaissance accordé dans les conditions fixées par les dispositions législatives péruviennes.

3. Régimes de couverture des risques d'invalidité, de survie et de décès

En cas d'invalidité, de survie et de frais funéraires, la pension ou bénéfice, selon le cas, est également financée à partir du solde cumulé sur le compte individuel de capitalisation et le capital pour la pension, dans le cadre du modèle de gestion des risques applicable, conformément à la législation péruvienne et selon les particularités établies dans le présent Accord administratif.

Article 22. Rentes viagères prévisionnelles accordées en vertu de la législation argentine

Les rentes viagères prévisionnelles accordées avant l'entrée en vigueur du système intégré de prévoyance argentin, ou celles accordées en vertu de l'application de la couverture du risque « accidents du travail », sont additionnées aux prestations prévues par la législation en vigueur, lorsque le bénéficiaire satisfait aux exigences de telle législation, en totalisant, si nécessaire, les périodes d'assurance visées à l'article 11 du présent Accord administratif.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23. Utilisation de formulaires ou d'autres moyens de communication parallèles

1. Les organismes de liaison des deux Parties établissent, à travers un ou plusieurs accord(s) complémentaire(s), les modèles de formulaires ainsi que les procédures et formalités à suivre aux fins de l'application du présent Accord.

2. Les organismes de liaison des deux Parties peuvent utiliser les moyens de communication et de diffusion qu'ils jugent appropriés, pour autant qu'ils conviennent

d'une procédure commune de contrôle de la qualité et de la fiabilité des informations ou des documents transmis à travers ces moyens.

Article 24. Confidentialité des informations

Conformément à l'Accord, l'autorité compétente, l'entité gestionnaire ou l'organisme de liaison de l'une des Parties ne transmet des données personnelles à l'autorité compétente, à l'entité gestionnaire ou à l'organisme de liaison de l'autre Partie uniquement aux fins de l'application du présent Accord, à moins que la réglementation de l'une des Parties n'en dispose autrement.

Toutes informations reçues par l'autorité compétente, l'entité gestionnaire ou l'organisme de liaison d'une Partie sont soumises à la réglementation de cette Partie en matière de protection de la confidentialité des données personnelles.

Article 25. Règlement des différends

Tout différend se rapportant à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord administratif et des instruments supplémentaires qui sont signés est réglé par voie de négociation entre les Autorités compétentes ou les organismes de liaison, selon le cas.

Article 26. Entrée en vigueur

Le présent Accord administratif entre en vigueur à partir de la date de réception de la deuxième notification par laquelle les Parties indiquent, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises en ce qui les concerne pour son entrée en vigueur. Il est conclu pour une période égale à celle de l'Accord et il reconnaît les droits énoncés dans ce dernier.

FAIT à Lima, le vingt-deux mars deux mille dix, en deux exemplaires originaux, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République argentine :

Pour le Gouvernement de la République du Pérou :